



SENTENCIA. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ***** y

RESULTANDO

PRIMERO. El quejoso ***** ** *** -por conducto de su defensor particular- con escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro y turnado el veintiuno de ese mes por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en esta ciudad (antes Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México), que estimó violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“**SEGUNDO.** El veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, b), de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 53, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General **3/2013**, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y, al número, a

la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto emitido por una autoridad del orden penal que tiene ejecución donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia.

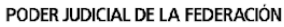
SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado.

Dicho criterio es de rubro siguiente: ***“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”***.

En ese orden, del análisis integral de la demanda y las constancias que integran los autos, se precisa que el acto reclamado en el presente controvertido lo constituye:

- La resolución dictada dentro de la causa penal 32/2019-E-IV y sus acumuladas, en audiencia de revisión de medida cautelar de once de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante la que determinó negar al quejoso alguna otra medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva, así como que esta última debía continuar vigente de forma indefinida durante todo el tiempo que dure el proceso.

TERCERO. Existencia de los actos. El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en esta ciudad (antes Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de México), **aceptó** la existencia del acto reclamado pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 84 a 155), lo que se corrobora con un disco compacto que contiene la videograbación del juzgado natural, así como diversas constancias certificadas, entre ellas la versión escrita de dicha determinación.



Pruebas que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

En relación con la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, localizable en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, de rubro: **“VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL”**.

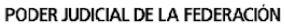
Manifestaciones que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que resulta suficiente para tener por demostrada la existencia del acto reclamado.

CUARTO. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia respecto del acto reclamado que deba estudiarse de manera preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación la jurisprudencia J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página noventa y cinco del tomo VII, de mayo de mil novecientos noventa y uno, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, de rubro y texto:

[illegible]

2. Así, el juez de la causa dio trámite al planteamiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que otorgó vista a las partes para que manifestaran los que a su interés legal conviniera



De igual modo, requirió al Titular de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, de la Guardia Nacional, para que remitiera el análisis o informe de riesgo, en relación con el justiciable, lo que así hizo dicha autoridad.

Esta determinación es la que constituye el acto reclamado en el sumario constitucional presente.

Lo anterior, se advierte de la copia certificada de diversas constancias que remitió la autoridad responsable de la causa penal ***** , así como un CD de la audiencia correspondiente que obran en autos del presente juicio de amparo, que se le concede pleno probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

En la audiencia de once de septiembre de dos mil veinticuatro, se advierte lo siguiente:

Juez:

5

[illegible]

Desde luego
de nuestra
plemente
posición c
go Nacio

... más esta
se y la

cese por
ce el artículo
l debate

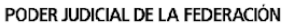
e acuerdo
autoridad

están so
r excedid
estarían u
realice p
que lo div
lo que v

la 1:40

ior, estan
términos

de Proc



pregunto defensa y fiscalía si están de acuerdo en que llevemos el debate de manera conjunta o lo hacemos por separado...”

Defensa:

“...estamos de acuerdo por parte de la defensa señor juez en que se lleve de manera conjunta...”

Fiscalía:

“...también estamos de acuerdo...”

Juez:

“...fiscalía entonces atendiendo a las manifestaciones que me estaba diciendo la defensa, le parece si hacemos el debate conjunto recuerde que está pidiendo dos temas, dos tópicos uno es el cese de la prisión preventiva por haber excedido el plazo de dos años y también está solicitando el cambio de medida cautelar, en ese sentido no hubo objeción...”

De lo expuesto se puede advertir que en la citada audiencia lo que fue materia de ésta, fue el cese de la prisión preventiva por haber excedido el pazo de dos años y la revisión de la medida cautelar, asimismo, las partes estuvieron de acuerdo que se resolviera de manera conjunta, lo que se precisa a fin de dar certeza a la parte quejosa.

OCTAVO. Estudio. Previo al estudio de los conceptos de violación que hace valer el quejoso en su demanda de amparo, es necesario realizar un resumen de lo acontecido en la audiencia que por esta vía se reclama.

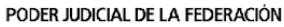
El juez de la causa procedió a resolver el asunto, expresando de inicio la competencia para conocer y pronunciarse de la citada petición inherente con el justiciable, dado que ante esa autoridad se tramita la causa penal 221/2024 (antes 32/2019), de la cual derivó la citada audiencia, incluso precisó que el artículo Quinto Transitorio del decreto por el cual se reforman, adicionan diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, lo autorizaba para revisar aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieran sido decretadas por

a de justicia
s ante el
da cautela
Nacional
sido interp
ñaló que
encuentra
hí que tan
o solicitar
cautelar,
cidad que l
ble es el
azo de do
e a criteri
n prevent
blece de c
sión de la
se prom
lo qué se c
il definició
particular
que para l
te del máx
ado de un
e debe
alidad de
como una
o caso del

a de justicia
s ante el
da cautela
Nacional
sido interp
ñaló que
encuentra
hí que tan
o solicitar
cautelar,
cidad que l
ble es el
azo de do
e a criteri
n prevent
blece de c
sión de la
se prom
lo qué se c
il definició
particular
que para l
te del máx
ado de un
e debe
alidad de
como una
o caso del

a de justicia
s ante el
da cautela
Nacional
sido interp
ñaló que
encuentra
hí que tan
o solicitar
cautelar,
cidad que l
ble es el
azo de do
e a criteri
n prevent
blece de c
sión de la
se prom
lo qué se c
il definició
particular
que para l
te del máx
ado de un
e debe
alidad de
como una
o caso del

a de justicia
s ante el
da cautela
Nacional
sido interp
ñaló que
encuentra
hí que tan
o solicitar
cautelar,
cidad que l
ble es el
azo de do
e a criteri
n prevent
blece de c
sión de la
se prom
lo qué se c
il definició
particular
que para l
te del máx
ado de un
e debe
alidad de
como una
o caso del



En cuanto al tópico de la necesidad refirió que se debe constatar que la medida cautelar debe de ser indispensable para conseguir el fin de legítimo que se persigue, esto es cuando sea el único medio para asegurar los fines del proceso, los cuales los encontramos identificados en el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que no exista otra medida que sea adecuada para tal fin.

En cambio el principio de proporcionalidad conlleva a concluir que esa medida no debe de ser desmedida siempre se debe de buscar la menos gravosa, en ese sentido ante el carácter de excepcionalidad de la prisión preventiva, en el que se determinó que la duración de ésta deben ser únicamente durante un plazo razonable, insistió que este concepto es muy importante puesto que a través de éste, la interpretación que ha hecho el máximo tribunal del país incluso es acorde a lo establecido por la corte interamericana se deben de atender ciertos parámetros, ciertos estándares para poder determinar si se está dentro de un plazo o no razonable, ello siempre considerando con los fines legítimos que se persigue la medida cautelar insistió que se asegure que el justiciable comparezca al juicio, se proteja el desarrollo de la investigación y la protección en su caso de las víctimas o testigos.

Insistió que el máximo tribunal del país ha reiterado que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la cual se haya sometido a esa medida se debe de llevar a cabo dentro de un plazo razonable pues si no se cumple un plazo razonable se estaría imponiendo una pena anticipada en franca violación y en perjuicio de la presunción de inocencia del procesado o de los gobernados.

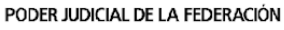
Indicó como bien lo dijo la fiscalía el máximo tribunal del país argumentó que para valorar la **razonabilidad del plazo transcurrido** en un proceso penal sin dictar sentencia definitiva y para efectos de justificar o no, su prolongación de la prisión

una de ellas.
o cual tom
es.
ento a la re
tres finalid
un tiem
ble dentro
a u ofend
o.
que el pr
én la fisca
entender
está o
dor establ
as: el arra
er oculto
domicilio
máximo d
e acuerdo
el imput
erior al he

una de ellas.
o cual tom
es.
Ante la re
tres finalid
un tiem
ble dentro
a u ofend
o.
que el pr
én la fisca
entender
está o
dor establ
as: el arra
er oculto
domicilio
máximo d
e acuerdo
el imput
erior al he

una de ellas.
o cual tom
es.
ento a la re
tres finalid
un tiem
ble dentro
a u ofend
o.
que el pr
én la fisca
entender
está o
dor establ
as: el arra
er oculto
domicilio
máximo d
e acuerdo
el imput
erior al he

una de ellas.
o cual tom
es.
ento a la re
tres finalid
un tiem
ble dentro
a u ofend
o.
que el pr
én la fisca
entender
está o
dor establ
as: el arra
er oculto
domicilio
máximo d
e acuerdo
el imput
erior al he



Además, dio contestación a los argumentos vertidos por la defensa, como la complejidad del asunto, la actividad procesal del justiciable, su derecho de defensa, que ya rebasó el máximo de dos años, qué no es proporcional con la actividad del procesado.

Explicó los riesgos procesales del encausado, dio contestación a las manifestaciones vertidas que el inculpado refirió respecto de que fue juzgado por el mismo delito en Estados Unidos de Norteamérica.

En esa arista, la parte quejosa reclama sustancialmente de la autoridad responsable, los siguientes conceptos de violación:

1. La autoridad responsable no corroboró por todos los medios a su alcance la fecha en que había sido detenido formalmente el quejoso con relación al proceso que se le sigue, a decir de la defensa más de diecisiete años, mientras que la fiscalía señaló que la fecha a partir de la cual había de computarse la prisión preventiva era a partir de que el impetrante de amparo había sido puesto a disposición en ese juzgado materialmente, esto es, a partir del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Refiriendo acreditar dicha circunstancia con la nota diplomática acompañada por la propia Fiscalía General de la República, con su respectiva traducción, así como diversos documentos que se localizan en las páginas oficiales de dicha autoridad, lo que debía considerar como hecho notorio, en lugar de resolver únicamente con las argumentaciones de las partes; aunado a que la postura de la responsable es desconocer el tiempo que duró la detención del quejoso mientras se tramitaba su extradición.

Aseveró que de una adecuada aplicación del método deductivo se evidenciaba que el quejoso, había sido puesto a disposición con motivo de la ejecución de una orden de

licitó la
abía trans
tablece el
Política de
la fecha c
sa; esto e
e julio de
cho de c

cho de c

able que

n excesiva

nisma es

sta, ya que

s el sosten

concreto, p

ncia de re

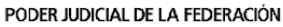
edencia c

ado el sei

autoridad re

s el sosten
 concreto, p
 ncia de re
 edencia c
 ado el sei
 utoridad re
 expuestos
 des, toda
 es así lo p
 n y sesgo
 n antes c
 o de la fi
 orisión pre

n y sesgo
 n antes c
 o de la fi
 orisión pre
 do en clar



3. Los argumentos expuestos por la autoridad responsable para justificar la prisión preventiva tomando en consideración tres razones: ejercicio de defensa del inculpado, complejidad del asunto y penalidades consideradas en su hipótesis más elevadas, son totalmente contrarios a los datos objetivos expuestos por la defensa, al derecho, a los parámetros, test de proporcionalidad y racionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales internacionales han definido cada uno de esos supuestos, para lo cual expuso cada uno de ellos y sus argumentos con los que los sustenta.

3.1 Se debe tomar en consideración derechos constitucionales como el principio pro persona donde se potencialice los derechos humanos y no se minimicen como pretende la aludida determinación que al parecer adoptó la autoridad responsable.

3.2 Refirió que se deben adoptar las medidas que tiendan a hacer efectivo el respecto a los derechos fundamentales de la parte agraviada, en cuanto a las prerrogativas de audiencia y acceso efectivo a la justicia concretando así el control de convencionalidad que armoniza las normas internas e internacionales, y esos plazos deben de tratar de ajustarse primeramente al de un año a que refiere la constitución y que es regulado secundariamente por el Código Federal de Procedimientos Penales.

3.3 Dijo que el derecho a la tutela judicial es el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales al plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respetan ciertas formalidades y dentro de los plazo y términos que fije las leyes, se resuelva sobre ello.

3.4 Además la autoridad debe ceñirse a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los plazos y términos razonables para el ejercicio de los derechos de acción y defensa ante los tribunales.

que se d...
actividad pro...
judicial...
de la perso...
s el últim...
también...
plazo, el...
denomina...
consiste e...
a las p...
transcurso...
el “plazo...
atenderse...
to confor...
onalidad y...
plazo razon...
ánimos de...
os debere...
uestión m...
nable por...
ningún tip...
utinio que...
por las cu...
to reclam...
de cualquier...
e no realiz...

el “plazo”
atenderse
to confor
onalidad y
plazo razon
ánimos de
os debere
uestión m

able por
ningún tipo
utinio que
por las cu
cto reclam

de cualquier
e no realiz

y escrutin
un desfa

inoperante e infundados.

Respecto del agravio mencionado en el numeral 1, consistente de manera sintetizada, en que la autoridad responsable no corroboró por todos los medios a su alcance la fecha en que había sido detenido formalmente el quejoso con relación al proceso que se le sigue, toda vez que la postura de ésta es desconocer el tiempo que duró el quejoso mientras se tramitaba su extradición, ya que resultaba evidente que la detención del aquí quejoso se remontaba a una fecha anterior a su puesta a disposición ante la autoridad responsable, lo que aconteció el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, deviene **inoperante**.

Al respecto, la autoridad responsable tomó la fecha de la detención en la que se cumplió la orden de aprehensión librada contra el impetrante de amparo, esto es, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, ya que fue la data en que se dejó a disposición de dicha autoridad al quejoso.

Ahora, el quejoso sustenta su dicho con el contenido de la nota diplomática 04507 acompañada por la propia Fiscalía General de la República, incluso el cual transcribió, en el que refirió que de su contenido se corrobora la fecha en que éste fue requerido para su extradición, del citado documento se advierte que el nueve de junio de dos mil ocho, la embajada de México solicitó la extradición de Zhenli Ye Gon, pero el citado dato es la fecha en que se solicitó la extradición del justiciable, sin que se advierta la fecha correcta de su detención o el motivo por el cual aconteció, de lo que se advierte ambigüedad respecto de ese tópico.

No obstante lo anterior, la autoridad responsable refirió que al margen de que tomara la data en que se cumplimentó la aludida orden de aprehensión, **era evidente como bien lo dijo la defensa ya había pasado en exceso los dos años que establece el artículo 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, Constitucional.**



En ese contexto, de la determinación emitida en audiencia de once de septiembre de dos mil veinticuatro (acto reclamado), relativo a dicho tópico refirió lo siguiente:

“...ponga atención señor justiciable porque esto radica evidentemente para poder yo sustentar si efectivamente está justificado la prolongación de la prisión preventiva, sí a consideración de suscrito no voy a tomar en cuenta los diecisiete años y me voy a pronunciar sobre ello, sino voy a tomar a partir de que fue puesto a disposición de este juzgado, no advierto que usted haya estado a disposición al margen de que las partes ni el agente del Ministerio Público ni la defensa se pronunció sobre tal tópico ustedes son categóricos la defensa y el señor justiciable son categóricos en afirmar que son más de diecisiete años sin embargo de una narrativa expuesta yo advierto otra fecha y sobre ese momento y sobre eso me voy a pronunciar más adelante

$$(\dots)$$

Aquí debo de identificar que conforme a los análisis advierto que la defensa y el señor justiciable afirman que el señor justiciable ha estado en prisión preventiva con motivo de estos hechos a partir del dos mil siete o dos mil seis y que con motivo de ello lleva aproximadamente más de diecisiete años o más de prisión preventiva, sin embargo, conforme a los datos que me expuso en la audiencia oral el fiscal me dice que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se cumplimentó la orden de aprehensión al señor justiciable.

Debemos indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre qué comprende el plazo de la prisión preventiva y sobre tal tópico ha dicho que la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad en cualquiera de los casos que prevé la constitución desde la detención con motivo de los hechos, aquí es importante que hace alusión el máximo tribunal del país que es de la detención con motivo de los hechos de la persona sujeta a procedimiento penal hasta la sentencia de primera instancia o hasta que cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva la situación jurídica del gobernado.

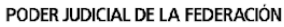
Sin embargo, aquí advierto dos circunstancias, advierto por las alegaciones que me está haciendo el señor justiciable, la defensa incluso la fiscalía advierto que fue procesado el señor justiciable en Estados Unidos en donde al desestimarse conforme a la información proporcionada por las partes donde al desestimarse la pretensión punitiva o el ejercicio de la acción penal según la ley del país vecino y se decretó una absolución.

Sin embargo, advierto también de la propia narrativa que me está haciendo la fiscalía que se solicitó un sobreseimiento con motivo de que evidentemente o advierto así que se trataban de

Es cierto que ha insistido señor justiciable que en los hechos por los cuales se le atribuyen, se le instruyen en el presente proceso son los mismos por los cuales resultó absuelto y por lo tanto considera él y su defensa estamos ante una situación de cosa juzgada o que ya fue juzgado doblemente por los mismos hechos, sin embargo, debo de admitir que conforme a la narrativa que me está haciendo la fiscalía ya se decretó infundado un incidente de sobreseimiento y por lo tanto hasta este momento no son diecisiete años los que lleva de prisión preventiva a consideración del suscrito sino que es a partir del dos mil dieciséis.

De lo expuesto, se advierte que dicha circunstancia no fue la detonante para emitir el acto reclamado en los términos mencionados, incluso la autoridad responsable refirió que con independencia de la fecha que tomó ya había transcurrido en exceso los dos años que establece el citado precepto constitucional.

De lo antes citado, también se observa que el agravio expuesto en el numeral **2**, consistente en que a la fecha que el quejoso solicitó la revisión de las medidas cautelares había transcurrido en exceso el plazo máximo de dos años que



En diverso orden, el agravio mencionado en el numeral **2.1**, relativo a que el criterio sostenido por la autoridad responsable en el acto reclamado, desde el momento en que admitió la incidencia que originó este juicio de amparo, lo hizo con un ánimo sesgado hacia la procedencia de dicha medida, en virtud al contexto del acuerdo dictado el seis de julio de dos mil veinticuatro, en el que la citada autoridad refirió que ese órgano jurisdiccional por los motivos ahí expuestos tiene el criterio de desechar de plano tales solicitudes, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales así lo permitía, de lo que se advierte según refiere una notoria animadversión y sesgo en el criterio de la responsable, en virtud de que aún antes de realizar el debate respectivo e incluso dejar a cargo de la fiscalía el justificar el porqué era necesario prolongar la prisión preventiva en el caso en concreto el juzgador

ya había dejado en claro que tenía un criterio inamovible respecto de ese tópico, resulta **infundado**.

En efecto, la autoridad responsable emitió el acuerdo en los términos mencionados por la parte quejosa, pero se advierte que fue bajo lo estipulado en el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, en virtud a que los tribunales de alzada revocaban ese tipo de proveído, fue que admitió dicha petición.

Al respecto, el citado precepto establece:

“Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares

De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud”.

De dicho precepto se advierte que se otorga la facultad a la autoridad de desechar de plano la solicitud de revisión.

No obstante a lo anterior, a consideración del suscrito no se advierte sesgo o animadversión de la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, toda vez que con independencia de que en su momento decidió desechar la solicitud de revisión conforme a la facultad prevista en el artículo 162 transcrito, se observa que resolvió lo solicitado conforme a lo que las partes argumentaron en la audiencia, respetando el debido proceso, el derecho de audiencia, las formalidades del procedimiento, entre otros.

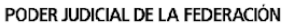
A mayor abundamiento este órgano jurisdiccional considera citar en términos generales —en virtud de que en los demás agravios formulados se explicara a detalle diversas circunstancias- la acontecido en la audiencia a fin de acreditar lo antes dicho.

Una vez iniciada la autoridad responsable procedió a identificar a las partes a la fiscalía, a la defensa (quien por los motivos ahí expuestos aceptó y protestó el cargo conferido) y el justiciable, incluso se le designó a éste una perito traductora que se encontraba presente a fin de auxiliar al quejoso, se encontraba

A manera de ejemplo la autoridad responsable declaró infundado el argumento que refirió la fiscalía que la causa penal de la que deriva el acto reclamado se le instruye al menos a veintiséis personas, toda vez que advirtió que el señor justiciable en su entrevista en el informe de evaluación refirió que el encausado tiene conocimiento de que se le instrúa la causa penal a tres personas incluyéndolo a él, toda vez que en la causa penal pueden existir determinaciones en sigilo que evidentemente el señor justiciable desconozca, entonces ahí no se le puede atribuir alguna falta de verdad o algún aspecto que carezca de verdad cuando el procesado tiene conocimiento que se le instruye a tres personas, dijo que no era obligación del inculpado saber exactamente a cuántas personas se le instruye el expediente, insistió que al ser una causa penal pueden existir determinaciones en sigilo de ahí que se encuentre justificado que al justiciable no necesariamente tenga conocimiento de todas y cada una de las personas por las cuales se les siguió proceso o se le sigue proceso.

Así como, declaró infundado que existe riesgo sobre los testigos, toda vez que no tenía elementos de convicción que le permitiera aseverar o concluir tal aspecto.

Estimó infundado los argumentos que dijo la fiscalía en cuanto a los datos de prueba que ofrecieron para poder verificar el



comportamiento posterior del justiciable, toda vez que como lo refirió la persona evaluadora hasta ese momento no se demostró que el aquí quejoso tuviera mal comportamiento.

De lo expuesto se puede concluir que no existió animadversión o sesgo en la determinación que emitió la autoridad responsable, por el contrario dado lo relatado y lo acontecido en la audiencia no se advierte datos al considerar que no existió imparcialidad, exhaustividad, congruencia, se insiste se resolvió conforme a los razonamientos expuestos y los fundamentos señalados en esa audiencia.

En esa tesitura, también, resultan **infundados** los agravios mencionados en los numerales **3, 3.4, 4, 4.1 y 4.2**, consistentes esencialmente en que los argumentos expuestos por la autoridad responsable para justificar la razonabilidad del tiempo en prisión preventiva tomando en consideración tres razones: ejercicio de defensa del inculpado, complejidad del asunto, conducta de autoridades y penalidades consideradas en su hipótesis más elevadas, son totalmente contrarios a los datos objetivos expuestos por la defensa.

Además, la autoridad responsable debió ceñirse a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los plazos y término razonable.

No ponderó o respetó el concepto de plazo razonable y lo que ello implica, además no tomó en consideración lo expuesto en la jurisprudencia 2001430.

Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente pueda ser revisada en el plazo de dos años posteriores a su aplicación, para el efecto de que se determine su cese o prolongación.

En el entendido que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, al respecto la

normatividad internacional debe ser una medida excepcionalidad para su imposición.

En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva deba prolongarse, la decisión que la sustente deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitara que esta medida cautelar se extienda innecesariamente.

Para lo cual se debe de emitir de conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar ese escrutinio, las autoridades tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades.

En el entendido que corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso en concreto se actualizan dichos elementos.

Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2839, libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, Undécima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2024608, de rubro y texto:

“PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. --- Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como



el tipo de delito cometido y los medios comisivos. --- Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. --- Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable”.

Ahora, respecto de la solicitud consistente en la revisión de la prisión preventiva toda vez que, como se observa del rubro “**consideraciones previas**” la autoridad resolvió dicha

relación)
artículo 19
mexicanos,
artículo C
ntos Pena
la Federa
que trat
personal o
por manda
os iniciad
terioridad
atorio adv
utado poc
n de dicha
procedenc
el alcance
en autom
sino que
es del C
a evaluar
) y el deba

por mandado de comparencia, los iniciados en la anterioridad del laboratorio advierten que el acusado poco a poco se va liberando de dicha dependencia procedimental, hasta que el alcance de la medida se agota en automoción, pero no solo sino que se produce la liberación de los del C. P. de la evaluación de la conducta, y el debate de la culpabilidad.

en autom
sino que
es del C
a evaluar
) y el deba
li...

47, Octubre
ceta del S
e rubro y te

**PROC
PROCES
DE DICI
CONTENIDO
CÓDIGO**



PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. --- El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculcado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculcado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita”.

Circunstancias que tomó en consideración la autoridad responsable al momento de emitir el acto combatido (cabe precisar que primero resolvió sobre el cese de la prisión preventiva y luego respecto al cambio de medida cautelar); por principio de cuentas estableció que era competente porque la causa penal de la cual deriva el acto reclamado es de su índice y conforme al artículo Quinto transitorio del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego resolvió lo siguiente:

CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA

El fiscal a
obre el
difícil definir
particulari

que para
te del máx
ra el dicta
s aspect
cional.

necesidad s
er indispen
o es cuanc
ceso, los
53 del C
que no ex

principio
da no deb
os gravosa
nalidad de
e esta de
insisto se
o que este
máximo trib
corte inter
ciertos es
n plazo o n

os fines le
es que
se proteja
caso de la
ximo tribu
el ordena
n ciertos
contra de u
e debe de

e debe de

Ello siempre considerando los fines legítimos que persigue la medida cautelar, insisto que es que se asegure que el justiciable comparezca al juicio, se proteja el desarrollo de la investigación y la protección en su caso de las víctimas o testigos, aquí debo de insistir que el máximo tribunal del país ha sido reiterativo en señalar que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la cual se haya sometido a esa medida se debe de llevar a cabo dentro de un plazo razonable.



Pues si no se cumple un plazo razonable se estaría imponiendo una pena anticipada en franca violación en perjuicio de la presunción de inocencia del señor o de los gobernados, aquí cabe indicar como bien lo dice la fiscalía el máximo tribunal del país argumentó e **indicó que para valorar la razonabilidad del plazo transcurrido** en un proceso penal sin dictar sentencia definitiva y a efectos de justificar o no su prolongación de la prisión preventiva se debe de tomar **tres elementos**: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de la autoridad judicial entre otras que participen.

Aquí es importante que me ponga atención señor justiciable porque esto radica evidentemente para poder yo sustentar si efectivamente está justificado la prolongación de la prisión preventiva, si a consideración del suscrito no voy a tomar en cuenta los diecisiete años y me voy a pronunciar sobre ello, sino voy a tomar a partir de que fue puesto a disposición de este juzgado, no advierto que usted haya estado a disposición al margen de que las partes ni el agente del Ministerio Público ni la defensa se pronunció sobre tal tópico ustedes son categóricos la defensa y el señor justiciable son categóricos en afirmar que son más de diecisiete años, sin embargo de la narrativa expuesta yo advierto otra fecha, sobre ese momento y sobre eso me voy a pronunciar más adelante.

Primero debo de indicarle señor justiciable que en cuanto al tema de complejidad del asunto se deben de verificar los siguientes supuesto o los siguientes temas: **uno** dificultad probatoria y su desahogo; **dos** pluralidad de sujetos procesales o cantidad de víctimas; **tres** tiempo transcurrido desde la violación; **cuatro** características de los recursos que establece la legislación y el contexto en que ocurrieron los hechos.

Sí esos temas son identificados o han sido el parámetro para poder concluir si estamos o no dentro de un **plazo razonable** estos parámetros ya fueron objeto de análisis insisto por el máximo tribunal del país, incluso se ve reflejado también o es concordante con lo que ha dispuesto los criterios convencionales.

En ese sentido, sobre estos aspectos se pronunció la fiscalía y me dice vía debate sobre estos aspectos que el tres de agosto del dos mil (sic), se resolvió dejar insubsistente, me dice que hay una que usted hasta este momento se encuentra en prisión preventiva con motivo de un auto de plazo constitucional, que no ha transcurrido el máximo de la pena, que se ha ejercido su derecho de defensa y que se rige su situación jurídica hasta este momento por el auto de plazo constitucional que se decretó en su contra, me dice que esencialmente se había decretado un auto de formal prisión que es por delincuencia organizada en la hipótesis o con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud en su modalidad de introducción al país transporte producción y

posesión de psicotrópicos son cinco eventos, aclaro son cuatro eventos, contra la salud introducción, transporte, producción y posesión, también se le atribuye el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de cartuchos en dos eventos, también operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pues bueno en cuanto al tema de **complejidad del asunto** dice la fiscalía lo siguiente, dice que en primer momento que los hechos está justificada la prisión preventiva, que en cuanto a los hechos que es complejo debido a que el doce de junio de dos mil siete, se ejerció acción penal en la causa en la averiguación previa con terminación ***** en contra de justiciable por el delito delincuencia organizada y otros, en los que acabo de indicar y delincuencia organizada, contra la salud en su modalidad de introducción, transporte, posesión y producción de psicotrópicos.

Especificó que primero le había correspondido conocer al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien tramitó la causa bajo el número 25/2007, el trece de junio de dos mil siete se libró orden de aprehensión por seis delitos, dijo que el catorce de julio de dos mil siete, también se consignó la averiguación previa con terminación 213/2007 en la cual se ejerció acción penal en contra del señor justiciable, por el delito contra la salud en su modalidad de comercio de psicotrópicos y si se identificó en la causa penal 40/2007.

Posteriormente el quince de septiembre de dos mil siete, se libró mandato de captura en contra del señor justiciable y el veintiséis de septiembre de dos mil siete, se ordenó la acumulación, todo ello en los índices de Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el doce de mayo de dos mil ocho se ejerció acción penal de la averiguación previa con terminación 088/2008 en donde se ejerció acción penal en contra del señor justiciable por diversos delitos operación de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de adquirir bienes y operaciones de recursos de procedencia ilícita, su modalidad de invertir recursos con conocimiento que tenían o procedían de una actividad ilícita, también por el diverso ilícito de operaciones de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de administración de bienes de recursos con conocimiento y con recursos dentro del territorio nacional, también sobre este ejercicio de acción penal conoció el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, en la causa penal 35/2008, el trece de mayo de dos mil ocho se libró orden de aprehensión en contra del señor justiciable y el uno de marzo de dos mil once existió una acumulación

Aquí debo de identificar que conforme a los análisis advierto que la defensa y el señor justiciable afirman que el señor justiciable ha estado en prisión preventiva con motivo de estos



hechos a partir del dos mil siete o dos mil seis y que con motivo de ello lleva aproximadamente más de diecisiete años o más de prisión preventiva, sin embargo, conforme a los datos que me expuso en la audiencia oral el fiscal me dice que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se cumplimentó la orden de aprehensión al señor justiciable.

Debemos indicar que en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre qué comprende el plazo de la prisión preventiva y sobre tal tópico ha dicho que la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad en cualquiera de los casos que prevé la constitución desde la detención con motivo de los hechos, aquí es importante que hace alusión el máximo tribunal del país que es de la detención con motivo de los hechos de la persona sujeta a procedimiento penal hasta la sentencia de primera instancia o hasta que cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva la situación jurídica del gobernado.

Sin embargo, aquí advierto dos circunstancias, advierto por las alegaciones que me está haciendo el señor justiciable, la defensa, incluso la fiscalía advierto que fue procesado el señor justiciable en Estados Unidos en donde al desestimarse conforme a la información proporcionada por las partes donde al desestimarse la pretensión punitiva o el ejercicio de la acción penal según la ley del país vecino y se decretó una absolución.

Sin embargo, advierto también de la propia narrativa que me está haciendo la fiscalía que se solicitó un sobreseimiento con motivo de que evidentemente o advierto así que se trataban de los mismos hechos, sin embargo, ese sobreseimiento resultó infundado no le asistió razón al señor justiciable de ahí que conforme a lo que me está indicando la fiscalía de los hechos narrados voy a tomar en consideración que solamente para efectos de la presente determinación de solicitud de cambio de medida cautelar y cese de la prisión preventiva voy a tomar en consideración que el señor justiciable ha estado a disposición de este juzgado a partir del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Es cierto que ha insistido señor justiciable que en los hechos por los cuales se le atribuyen, se le instruyen en el presente proceso son los mismos por los cuales resultó absuelto y por lo tanto considera él y su defensa estamos ante una situación de cosa juzgada o que ya fue juzgado doblemente por los mismos hechos, sin embargo, debo de admitir que conforme a la narrativa que me está haciendo la fiscalía ya se decretó infundado un incidente de sobreseimiento y por lo tanto hasta este momento no son diecisiete años los que lleva de prisión preventiva a consideración del suscrito sino que es a partir del dos mil dieciséis.

Evidentemente al margen de que tome en consideración del dos mil diecisiete o dos mil dieciséis, que fue cuando se

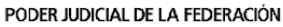
pensión e
 n lo dice
 ue estable
 ar qué si
 del señor j
 me ha h
 justiciabl
 sideró que
 a pública
 un asunto
 y no es

y no es a

indicar cómo se debe
que el veredicto de
prisión por
a enume
rme con e
eciséis, in
e enero de
al 242/20
l prisión,
al ampa
eciséis, se
licitó el so
a fecha de
pués me
sted solicit
einte se
eimiento.

os mil veint
usticiable,
nte se llev
go Feder
cho de ma
niento y n
a probable
se decret

señor just
res de ago
el auto d
il dieciséi
scalía, po
declara i
tó la acum
se solici
e dos mil



confirma, apela a esta determinación el señor justiciable y fue confirmado por el tribunal de alzada.

Dice el señor justiciable que la fiscalía que en la presente causa también para demostrar que el **asunto es complejo** se instruye al menos a veintiséis personas, aquí advierto que el señor justiciable en su entrevista en el informe de evaluación y ahí es infundado el argumento que está haciendo la fiscalía, dice que el señor justiciable que él solamente tiene conocimiento de que se le instrúa la causa penal a tres personas incluyendo a él, evidentemente ahí es infundado lo que dice la fiscalía, la sola circunstancia debemos recordar que en la causa penal pueden existir determinaciones en sigilo que evidentemente el señor justiciable desconozca, entonces ahí no se le puede atribuir a alguna falta de verdad o algún aspecto que carezca de verdad cuando el señor justiciable solamente tiene un conocimiento que se le instruye a tres personas, esto es, no era obligación del señor justiciable saber exactamente a cuántas personas se le instruye la causa penal, insisto puesto que al ser una causa penal pueden existir determinaciones en sigilo de ahí que se encuentre justificado que el señor justiciable no necesariamente tenga conocimiento de todas y cada una de las personas por las cuales se les siguió el proceso o se les sigue proceso en la causa penal de la cual se instruye.

Dice la fiscalía que existe dificultad probatoria de diferentes tipos de prueba que se han hecho valer, oferta de pruebas, existe una equidad que en igualdad entre las partes en atención al principio de equidad procesal, que si existe un trato digno e idéntico que no puede existir desventaja y me cita la tesis 173505 en donde existe o prevé en esa tesis del principio de adquisición procesal que la prueba influye para cada una de las pretensiones que no solamente para aquellas que la ofrecen sino que pueden salir beneficiadas todas las partes y que no pertenece a la prueba cada una de ellas sino al proceso.

Dice que el expediente es un expediente voluminoso y que existen ciento noventa y ocho tomos, ocho anexos y que existe una dificultad probatoria, dice que también se debe de tomar en cuenta que el señor justiciable se encuentra actualmente recluido en el centro número uno de Altiplano, que ello conlleva una logística en específico para poder llevar acabo y desahogar cada una de las diligencias que se requiere el proceso.

Refiere también que ello conlleva también o se debe tomar en cuenta las notificaciones, requerimientos y que ello se necesita un cierto tiempo para llevar a cabo cada uno de los actos procesales, dice que se requiere atendiendo a los ilícitos o a los hechos que probablemente ya hasta la etapa que se analiza se le atribuyen al señor justiciable es posible que se encuentre en un centro de la ley y la constitución específicamente el artículo 18

[illegible]

ne reglas e
ue tiene e
ferenciado
os delitos
de comuni
ue el señ
o obedec
ntre aprox
ratificacio
res, testig
claración
y que
ce también
de testigo
s en don
e han lib
esales.

preventiva
ejercicio de
conductas
partido algu
parte de la
también del
e de julio,
contingencia
ngencia se
una reanu
egreso es
ue eviden
ente asunt
en algun
es atribu
argo, debe
existe una

en algunas
es atribu
argo, debe
rste una
nsión de
sanitaria
s procesa
uebas me
lo por la
evidentem
la etapa c
o los delito
este mo
o de fuga p



Que la suma de la pena por el cual se pudiesen poner al señor justiciables data aproximadamente de ciento ochenta y cuatro años, que existe el riesgo de la comisión de nuevos delitos que atendiendo a la gravedad de los delitos existe una necesidad de investigar, existe un peligro efectivo y que conforme a la prisión preventiva hasta este momento no se ha dictado sentencia que es necesario la prisión preventiva, hasta aquí me voy a pronunciar sobre la complejidad del asunto.

La actividad procesal del señor justiciable y la actitud, advierto evidentemente que existe aquí un principio de buena fe, lo cual advierto tanto de la fiscalía como de la propia defensa, advirtió que son aproximadamente más de doscientos tomos los que tiene su asunto, sí me voy a aprovechar por cada una de las manifestaciones que me está haciendo el defensor, sin embargo, también advierto que el señor defensor y tanto la fiscalía son muy empáticos en ese aspecto, **evidentemente a consideración del suscrito si se trata de un asunto sumamente complejo**, advierto que evidentemente insisto los datos analizar o los temas para poder concluir estamos ante la complejidad del asunto, es dificultad de pruebas y evidentemente son muchos tomos, son diversos sujetos procesales al menos son veintiséis por los cuales se ejerció acción penal y al menos usted y tres más que se sigue en instrucción evidentemente si bien es cierto que no hay víctimas y que el momento de que usted fue detenido insisto voy a tomar en consideración la data que usted fue puesto a disposición que fue el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Insisto al margen que sea dos mil siete o dos mil seis ya ha excedido en exceso el plazo de dos años, sin embargo, a consideración de suscrito estimó que es **fundado el argumento de la fiscalía existe una complejidad del asunto, existe una dificultad de pruebas, existen diversos sujetos procesales, las características de los recursos y la legislación y el contexto donde ocurrieron los hechos evidentemente sí hacen que sea complejo** además no se trata de un solo evento que se le atribuyen al señor justiciable, al menos conforme a la narrativa que está haciendo la fiscalía es el delito contra la salud en su modalidad de introducción, transporte, producción, posesión, contribución al desvío y producción de narcóticos o psicotrópicos en los términos que dijo la fiscalía.

También se le atribuyen al menos son todos y cada uno son eventos que son aproximadamente son seis o cinco eventos conforme a lo que me está diciendo la fiscalía también se le atribuyen los siguientes eventos posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército dos eventos, posesión de cartuchos y de uso exclusivo, también dos eventos delincuencia organizada con las finalidades de cometer delito contra la salud y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, en ese sentido a consideración del suscrito con la narrativa que está diciendo la fiscalía, incluso con

*la propia defensa, destacó la muy buena fe que me está haciendo la propia defensa, también incluso con los argumentos que me está haciendo la defensa en ese sentido que también el asunto es complejo y **atendiendo a estos parámetros sí puedo concluir que este momento es infundado el argumento del cese de la prisión preventiva.***

Señor justiciable insisto estos parámetros o estos estándares mínimos que estoy destacando son los que incluso ha consideración del suscrito se obtienen de la propia interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder concluir si estamos ante un plazo o no razonable y a efecto de justificar o no la una prolongación de prisión preventiva cuando evidentemente sobrepasan lo siguiente: los dos años, entonces nos ubicamos dentro de la excepción que establece el artículo 20 constitucional es cierto que existe una prohibición de dos años como bien lo destaca la defensa no obstante ello a consideración de suscrito como fundadamente lo está diciendo la fiscalía nos encontramos dentro de la excepción que marca tal numeral de ahí que a consideración de suscrito es infundado el argumento que me está diciendo la defensa y el propio señor justiciable”.

REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

“Ahora me voy a pronunciar en cuanto al cambio de la medida cautelar, sobre tal tema señor justiciable, le debo de indicar tres aspectos debo de empezar diciendo que la medida cautelar tiene tres finalidades, la primera finalidad o el primer objetivo es asegurar la presencia de la persona justiciable dentro del procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o testigo, evitar la obstaculización del procedimiento.”

Sobre este aspecto debo de indicar que el propio legislador como bien lo destaca la defensa y también la propia fiscalía el legislador se ha pronunciado sobre qué se debe de entender o qué se debe tomar en cuenta para verificar **si está o no garantizada la comparecencia**, incluso el legislador establece que especialmente se deberán tomar las siguientes circunstancias:

Uno, el arraigo que usted tenga en donde deba de ser juzgado determinado por el domicilio residencia habitual asiento familiar, facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, falsedad sobre el domicilio y la facilidad de sobre el domicilio, pueden constituir presunción de riesgo de fuga el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito al delito que se trate y la actitud que adopte el imputado ante este y el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento anterior.

No me voy a pronunciar en cuanto al aspecto de seguridad de la víctima, testigos, comunidad o también la obstaculización del



procedimiento, puesto que como bien lo dice la defensa no advierto que hay algún riesgo no advierto que se pueda o que sea necesario neutralizar algún riesgo procesal sobre esos tópicos, es cierto como bien lo destaca también usted señor justiciable no advierto que se tenga que neutralizar o garantizar alguna parte para seguridad de la víctima, testigo, la comunidad o también no advierto algún aspecto que pueda influir en la obstaculización de procedimiento, sin embargo, sí advierto que usted tiene unos riesgos procesales que a consideración del suscrito hacen infundada su petición.

El motivo por el cual determinó que es infundado el argumento porque se me vino aquí a decir un **informe de evaluación** el cual me voy a pronunciar como bien lo destaca la defensa y también lo destaca la fiscalía advierto que existe un riesgo de evaluación procesal que concluye que usted tiene un riesgo medio, que usted tiene ciertos riesgos procesales y en ese sentido a consideración del suscrito hace que eso torne **infundada la petición de cambio de medida de cautelar.**

Debo de indicar a efecto de sustentar, se desahogó un medio de prueba el cual ya adquiere la calidad de prueba en el cual se vino a dar testimonio sobre un informe de evaluación que se le practicó a usted señor justiciable, en principio debo de indicar que todos los medios de convicción, datos de prueba, medios de prueba y prueba, que fue desahogada la testimonial ante el suscrito que conforme lo que hablo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, los valores desde este momento de manera libre y lógica, con fundamento en el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bien al desahogo de la testimonial vino la persona subagente de nombre ***** quien nos dijo que tenía una edad de treinta y ocho años de edad, que entendía el idioma castellano, a preguntas de la defensa dijo su ocupación, que era subagente de la Guardia Nacional, que estaba inscrito en la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, sobre este aspecto puede advertir el señor justiciable que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca qué es lo que debe de entenderse o más bien cuáles son los principios que rigen los informes de evaluación.

Sobre tal tema el artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso que regirá sobre los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad del desahogo del testimonio del subagente *****
**** ***** ***** puedo advertir en primer momento uno que es acorde a los principios que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales específicamente en el artículo 164 de dicho ordenamiento advierto que fue llevado a cabo por una

autoridad plenamente identificada u ordenado, reconocida por el propio legislador en el caso por la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Advierto que no depende de esta persona por eso concluyó que es acorde a los principios que establece tal numeral, advierto que esta persona no depende ni de la fiscalía, no depende tampoco del juzgado, ni tampoco tiene alguna injerencia con la defensa, admito que esta persona, esta dependencia es totalmente independiente que es la Guardia Nacional, advierto que también se emitió por una persona debidamente capacitada para ello puesto que es una persona que tiene el cargo de subagente, también advierto que tiene cinco años aproximadamente en el cargo, también sus actividades, entre otras, supervisar las obligaciones procesales específicamente es llevar a cabo las evaluaciones de riesgo, el cual es un análisis técnico jurídico.

También, dijo la capacidad técnica que tiene esta persona, dijo que era técnico en informática, licenciado en supervisión, maestro en derecho procesal, incluso ha tenido una capacitación y debido a los cursos de la Guardia Nacional en donde se desarrolla para ellos y que el curso consiste en llevar a cabo obtener conocimientos básicos para la evaluación de riesgos y posibilidad de poder informar al juez de la causa, también nos dijo nos vino a dar cuenta que sí sabía el motivo por el cual se estaba presentando ante este órgano jurisdiccional y dijo que llevó a cabo una evaluación al señor justiciable el diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

De igual forma, nos dijo que en cuanto a la evaluación que se toman las factores que tomó en cuenta dice que son los factores que establece el artículo 168, 169 y 170 el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al tema de los factores de estabilidad que prevé el artículo 168, fracción I, dijo que obtuvo un domicilio que era un auto, que era de detención, que era un domicilio y de autos dijo que también había advertido que a través de las fuentes públicas se advertía que vivió cerca de dos años en la delegación que está ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México y que sustentaba también en fuentes abiertas y con un contrato de compraventa.

También hay un arraigo familiar en donde se podía advertir una estabilidad que es desde el que son corroborado el trece de junio de dos mil veinticuatro, en donde se acreditaba o se modificaba la existencia del bien inmueble y que fue atendido por el hijo del señor justiciable en donde vivía con su familia.

En cuanto al arraigo laboral dijo que sí hizo referencia dijo que antes de la detención del señor justiciable le había indicado que él era empresario en el aspecto o en la rama de medicamentos y en la administración de empresas y en la Ciudad de México en cuanto los factores de estabilidad del artículo 168



en la fracción II, dijo que fue declarado absuelto en Estados Unidos que tenía diecisiete años sin recibir sentencia, que tenía cuentas bancarias también en México y en China, estaba a disposición dijo que en la entrevista contaba con una plena disposición del señor justiciable, que tenía disponibilidad para llevar a cabo era muy buena, tenía muy buena disponibilidad era cooperativo y que también verificó la partida jurídica en donde tampoco no advirtió alguna mala conducta y que no tenían ningún correctivo disciplinario señor justiciable.

En cuanto a factores de estabilidad dijo que no había factores de riesgo en cuanto al 169 así lo dijo, sin embargo también destacó los factores de estabilidad y que estaba imposibilitado por estar privado de la libertad y que no tiene información de llevar a cabo o que pudiera llevar a cabo algunas de las conductas que establecía el 169, por lo tanto ese aspecto le era favorable señor justiciable, en cuanto a las fuentes consultadas nos dijo que en primer lugar era la carta de consentimiento y en donde se extendía donde se obtenía la entrevista y había un número telefónico donde corroboraba la partida jurídica en el centro de reclusión.

También se podía confirmar en plataforma México, así como de los informes de la propia Guardia Nacional, concluyó que el nivel de riesgo del señor justiciable era nivel medio y que su evaluación estaba conforme a los principios que establecía el propio Código Nacional que era neutralidad, objetividad imparcialidad y mínima intervención, dijo que el justiciable le asistía el derecho al principio de presunción de inocencia, que adjuntó documentos comprobante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un domicilio, que se verificó ese domicilio, una credencial del hijo y con un contrato de comodato del domicilio, dice que también hay un documento homologado por la persona que le coadyuvó en la Ciudad de México y que pues bueno también un reporte donde se intercambiaron o de los intervinientes venían las firmas y también las fotos que hizo analizaban fotografías, sin embargo, si bien es cierto que tiene factores de estabilidad, **lo cierto es de que el señor justiciable tiene factores de riesgo; motivo por el cual determinó que es infundada la petición,** porque tiene peligros o factores de peligro de sustracción, los cuales a preguntas de la fiscalía fueron destacados y los cuales me voy a pronunciar en este momento.

Debo de insistir aquí señor justiciable en la circunstancia esencialmente ponderó de mayor relevancia al informe de evaluación puesto que es un informe insisto emitido por una autoridad totalmente independiente que fue adscrito a la Guardia Nacional en donde hace un análisis jurídico, esto es, advierto que hace un estudio integral con motivo de una entrevista que le hace usted, una verificación con los datos que usted le proporciona con sus familiares, también verificó la partida jurídica y es una persona que tiene encargado hacer evaluaciones y esta persona a pesar

solamente
telar de p
ne a dec
e la perso
luaciones
en algún
gla en par
momento

riesgo dijo que el principal factor de presión en la industria, en los Estados Unidos, es el costo de la mano de obra, sin embargo, en México, que es un país en desarrollo, más que un país desarrollado como los Estados Unidos, Honduras y Colombia, el riesgo, a nivel de la industria, es el robo que son los delitos contra la propiedad de las empresas, mexicanas o extranjeras, y las pérdidas en diversos sectores de la economía. La explicación se debe a que en México los delitos contra la propiedad son los delitos más frecuentes, los delitos más importantes, los delitos más factibles de cometer y los delitos más fáciles de cometer.

de suscritos
factores de
ar esos fa
bién a pre
o 168 frac
o de sustr
quí debo d
ximo o só
considera
go, aquí n
e el artí
de sustrac
do en cue
la fracción
tracción q

do tomar ta
ner, debo
el señor.
e presunc
como bien



existe un auto de formal prisión que de manera probable lo hace que exista alguna intervención hasta este momento en los ilícitos que se le atribuyen, de ahí que en este momento sí me es posible conforme al propio artículo 168 fracción II, tomar como máximo de la pena el cual insisto no es lo único que estoy tomando en cuenta.

No obstante ello también señor justiciable hay otro factor de peligro de sustracción que es la fracción III del 168 en donde usted tiene un mandamiento del fuero común y que es una orden de aprehensión de ahí que a consideración del suscrito insisto este informe de evaluación es un estudio integral un estudio socio (sic) que sí lo identifica la persona evaluadora como un análisis técnico jurídico, que no solamente insisto tome en cuenta su entrevista sino que también lo adminicula, verifica los datos con un familiar que usted mismo le proporciona, la entrevista y con fuentes abiertas y cerradas en mi caso advierto que fueron en la partida jurídica.

También destacó que en ese tipo de fuentes y que a pesar de que él concluye que existen ciertos factores de estabilidad, lo cierto es que sí destaca estos factores de peligro de sustracción y los cuales insisto no tengo otro elemento de convicción el cual a consideración del suscrito son suficientes para poder evidentemente declarar infundado, estimar que le asiste razón al señor fiscal en ese sentido de que en este momento no existen las condiciones para poder hacer el cambio de la medida cautelar insisto la prisión preventiva si bien es cierto que es la última que se maneja como que es la más agresiva que se pueda imponer al señor justiciable, hasta este momento considero que es la única que puede neutralizar o garantizar los riesgos procesales que aquí se vinieron a destacar si los cuales acabo de indicar y que pues bueno en ese sentido a consideración del suscrito son suficientes para poder confirmar la prisión preventiva que hasta este momento está en contra del señor justiciable.

A preguntas de la fiscalía también se contestó que en el artículo 168 la estabilidad que fueron corroboradas por los homologos, que el arraigo laboral, que era empresario, que eran empresas y que el giro se corroboró, que no se corroboró (sic) el giro y que la información fue a manera voluntaria y que se corrobore por un familiar.

En cuanto al artículo 169 fracción II, que el peligro de obstaculización dijo que son culpados dos personas, que se corroboró de la misma manera, esto es, con la entrevista y con las preguntas al familiar y que la información que proporcionó un familiar, dijo que en la conclusión de riesgo medio dijo que era una excesiva aplicación de la prisión preventiva, que no ha recibido sentencia y que no tiene a una absolutoria, ni testigo, sobre la prolongación de la prisión preventiva ya me pronuncié, no obstante ello a consideración del suscrito evidentemente estamos

ocho de
ntó la o
scalía, p
nticuatro,
a prolon

También a la
 las cautel
 que son e
 preventiva e
 puede hac
 señor ju
 sa volun

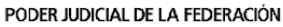
...to en cu
e él hab
operacione
orma de fu
pena, r
cuál es la
pudiese
ñor justic
ontrados
sustracc
a, insist
a conside
amos ant
én me ju
ción en
a la mani

or cada u

or cada u
es más
necesida
elar y la fi
ividad pro
razones
sospec
a de que
sabilidad
existe un

Dice la fiscalía que existe peligro de sustracción y que no está garantizada la comparecencia que el arraigo donde deba de ser juzgado no hay un arraigo determinado, por el domicilio que tiene usted familia en el extranjero, sobre ese aspecto ya me pronuncié, en ***** que vivió en diversos países, que es un riesgo, que es un peligro de sustracción, que tiene propiedades en el extranjero, que tiene posibilidad de pagar una garantía, que tiene empresas, que se eleva el riesgo, en cuanto al comprobante de la Comisión Federal de Electricidad que tiene un nombre ajeno a las personas que celebraron el contrato de comodato, sobre este punto advierto que la defensa ha reiterado en decirme que el domicilio del contrato de comodato es diverso al domicilio que obtuvo la fiscalía conforme al dato de prueba que ofreció y el Registro Público de la Propiedad, pero al margen de ese argumento no advierto que se haya superado este argumento que me está diciendo la fiscalía.

Entonces en ese aspecto creo que es fundado, más bien estimó fundado el argumento que está diciendo la defensa, sin embargo, insisto el motivo por el cual determinó que tampoco no existe un arraigo domiciliario es precisamente porque no me coincide también el nombre de la Comisión Federal de Electricidad y sobre ese aspecto no se demostró algún dato, medio de prueba que pudiera concluir algo diverso, en cuanto al oficio de reserva sobre ese aspecto ya no me pronuncio, advierto que destaca la defensa no advierto una manifestación de mala fe, una mendicidad como lo pretende como lo alega la defensa, sin



embargo, estimó que es insuficiente porque con el argumento que acabo de indicar considero que no está satisfecho el arraigo domiciliario del señor justiciable.

Dice la fiscalía que existe un registro y que existe un trabajo en Lomas de Chapultepec, un oficio de terminación 4759 el titular de Afiliación del Seguro Social en donde obra un registro de veinticuatro de febrero de dos mil seis, que es del centro de trabajo en Lomas de Chapultepec y que está asegurado en el domicilio, no advierto que sea suficiente para no tener por acreditado el arraigo laboral, no obstante ello, también incluso destacó los peligros de sustracción que acabo de indicar, en cuanto al diagnóstico que es el domicilio familiar y que es el mismo que está asegurado, que no hay un arraigo domiciliario, bueno coincido en parte de lo que dice la fiscalía.

En cuanto al máximo de la pena ya me pronuncié y la partida jurídica, el comportamiento posterior dice que hay un diagnóstico inicial psicológico del altiplano, sobre este aspecto estimó infundado los argumentos que está diciendo la fiscalía, en cuanto a los datos de prueba que me ofrecieron para poder verificar el comportamiento posterior incluso tomó de especial relevancia lo que me viene a decir la persona evaluadora hasta este momento no puedo tener por demostrado que el señor justiciable haya tenido mal comportamiento y de ahí que es infundado los argumentos que me dice la fiscalía.

Todo lo demás sobre este aspecto ya me pronuncié y me dice que es necesario que se persigue el mismo fin, dice que es proporcional, que es idóneo y que no es excesivo y sobre esto también a consideración del suscrito y coincido con lo que está diciendo la fiscalía.

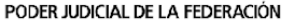
Voy a pronunciarme por cada una de las manifestaciones que está haciendo la defensa, la defensa vía debate dijo que no se establecieron los requisitos, que no se demostraron lo que la autoridad, que evidentemente que el interesado el que sea atribuible al señor justiciable el interesado que es el detonante, sobre este aspecto debo de indicar que podemos considerar el suscrito y decimos que eso es infundado conforme a la relatoría que me dijo la fiscalía advierto que pues bueno incluso se ha celebrado en este año una ampliación de declaración del señor justiciable, de ahí a consideración del suscrito si se ha respetado su derecho de defensa, insisto se ha respetado el ejercicio de su derecho de defensa, la fiscalía dijo que al momento de llevar a cabo diversas declaraciones, dijo que han llevado al momento de citar que son trece ratificaciones, ampliaciones y que se ha llevado ampliaciones de declaración del justiciable.

Por lo tanto, sí destacó todas y cada una de las pruebas insisto no debe de analizarse de manera aislada para poder verificar la complejidad del asunto, la actividad o no procesal del señor justiciable, a efecto de constatar la complejidad del asunto

el derecho
 está acre
 sujetos y
 ocurrieron
 isis integra
 quiere o la
 a de la Na
 satisfecho,
 ue me dic
 les sí me p
 su derecho
 o ya reba
 tiempo ra
 por los m
momento
la prolong
 o resulta
 e me está
 e la activid
 es una m
 ruebas qu
 fiscalía ha
 determina
 su perjuic
 ue se deb
 e debe de
 asunto es s
 ones que
 atendienc
 izar sí pu
 lidad de co

el derecho
 está acre
 sujetos y
 ocurrieron
 isis integra
 quiere o la
 a de la Na
 satisfecho,
 ue me dic
 les sí me p
 su derecho
 o ya reba
 tiempo ra
 por los m
momento
la prolong
 o resulta
 e me está
 e la activid
 es una m
 ruebas qu
 fiscalía ha
 determina
 su perjuic
 ue se deb
 e debe de
 asunto es s
 ones que
 atendienc
 izar sí pu
 lidad de co

el derecho
 está acre
 sujetos y
 ocurrieron
 isis integra
 quiere o la
 a de la Na
 satisfecho,
 ue me dic
 les sí me p
 su derecho
 o ya reba
 tiempo ra
 por los m
momento
la prolong
 o resulta
 e me está
 e la activid
 es una m
 ruebas qu
 fiscalía ha
 determina
 su perjuic
 ue se deb
 e debe de
 asunto es s
 ones que
 atendienc
 izar sí pu
 lidad de co



Dice que es de dominio que es un asunto complejo, dice la defensa coincido con ese aspecto incluso para una revisión de él, dice que es un desfase no inimputable a ninguna persona y el sistema que está sobrecargado, dice que existe carga de trabajo, que es obligación del estado mejorar la situación y que no se puede arribar, no se le puede atribuir al justiciable que el desarrollo por parte del juzgado es bueno, que no advierte otro aspecto, dice que sobre la medida que se debe de haber resuelto sobre cuarenta y ocho horas, de manera muy respetuosa difiero no me es atribuible a las cuarenta y ocho horas, incluso el propio Quinto transitorio y la propia interpretación que ha hecho el máximo tribunal del país sobre tal numeral establece que se le debe de dar vista a las partes y que en su caso debe de ser público de investigar y a efecto de poder verificar.

Si bien es cierto existió un diferimiento, eso es cierto que existe un diferimiento, no obstante ello el suscrito requirió o ha requerido a la fiscalía que demuestre o que justifique el motivo por el cual no se presentó a la anterior audiencia y acordaré lo conducente en caso de que no se justifique esa ausencia, dijo que el cambio de defensa el Ministerio Público no dijo porque trata de dilatar el proceso no advierto que el cambio de defensa sea un motivo de dilación del proceso sino que era un argumento que a consideración del suscrito la fiscalía invocó a efecto de justificar que estamos dentro de un asunto complejo.

Dice que los hechos son conexos y que la misma temporalidad, incluso existe una normatividad en donde se pueden acumular y que ya incluso fue juzgado en Estados Unidos, la prisión preventiva se prolongó de manera injustificada y que ya torna de manera ilegal a consideración del suscrito la prisión que en ese momento impera sobre el señor justiciable no deviene de manera ilegal, sino que tiene su sustento en un auto de formal prisión que fue dictado en su contra, de ahí que a contrario el suscrito estime fundadas las manifestaciones que me están diciendo la defensa.

Refiere que el domicilio es diferente al Registro Público sobre ese aspecto ya me pronuncié, dice que en la declaración que no es el mismo que se solicitó en el Registro Público que el domicilio en Anzures que puede ser un domicilio diferente también ya me pronuncie sobre ese tópico, que sí existe el domicilio y que puede ser corroborado.

En cuanto a los diferentes estudios no se advierte que fuera peligroso, sí es fundado el argumento de la defensa, no advierto que el señor justiciable con algún dato de prueba que el señor justiciable tenga un comportamiento por el hecho de manera peligrosa que haya tenido correctivos disciplinarios es agresivo, incluso lo puedo constatar que en la presente audiencia ha estado el señor justiciable, ha sido muy cooperativo y respetuoso de esta autoridad, de ahí que también no tengo ningún elemento de

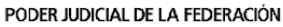
al asiste h
dado justi

consideración
tanto como
se destaca
la me

del sottoscritto
preventiva
mento si

me dice q
anto a que
de dos a

algún da
dentemen
usticiable



acuerdo con los argumentos del Ministerio Público, desea manifestarse que lleva más de diecisiete años en prisión preventiva, sobre ese aspecto ya me pronuncié, insiste en que todos los cargos que fue acusado que ya fue absuelto sobre todos ellos en contra la salud, dice que hay un tribunal en Washington, Estados Unidos en donde el veintiocho de agosto de dos mil nueve, en donde se advierte que ya fue juzgado por los mismos hechos que se le atribuye, que incluso que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México en dos mil dieciocho que fue aceptado por este juzgado y que fue confirmado en segunda instancia, dice que es un documento judicial la absolutoria de Estados Unidos, que los cargos son los mismos, que la delincuencia organizada que todas las averiguaciones previas son iguales que en Estados Unidos y en México que son los mismos hechos, incluso son los mismos hechos, lugares, circunstancias, mismas pruebas, mismos testigos de cargo y que declararon exactamente lo mismo, que no existe ningún testigo de cargo que sea suficiente para demostrar, dice que sufrió actos que él no llevó a cabo o no llevó a cabo las conductas que se le atribuye en la causa penal de la cual deriva la presente audiencia por el contrario fue víctima de los actos de la delincuencia organizada.

Dice que él demostró que evidentemente es un empresario, que no se demostró que fuera parte ni él ni sus empresas de la delincuencia organizada, las declaraciones de los agentes que no están corroborados en sí mismos que los agentes de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, negaron que existía una organización que operaba en el Estado de México y en la Ciudad de México, que incluso eso se puede verificar en el tomo C, en las fojas 514 en unas diversas que indicó, en el tomo 102 en la foja 66 a 800, también se puede constatar esa circunstancia que el cinco de diciembre de dos mil cinco hasta el quince de marzo de dos mil siete que no existe algún acuerdo que exista que el era parte de la delincuencia organizada, dice que es necesario que existan testigos, que no hay testigos que incluso son los mismos testigos en las mismas pruebas que fundó su absolutoria en Estados Unidos que no se está seguro de que hay pruebas, que se autoriza el cambio de la medida, que ya lleva más de diecisiete años privado de su libertad, que se le dictó una sentencia absolutoria en Estados Unidos que fue confirmada por el tribunal de alzada.

Que los hechos en cuanto a los documentos que sí tenían los documentos legales para importar tenía la autorización de las empresas, que nunca facilitó, nunca fue parte de la delincuencia organizada, nunca facilitó ni tampoco nunca llevó a cabo ninguna de las hipótesis que se le atribuyen de los delitos contra la salud, que las empresas siempre las empresas de señor justiciable siempre y en todo momento cumplieron con los requisitos de la ley aduanera, o incluso la ley, incluso las autoridades mexicanas autorizaron la importación de la materia prima que llevó a cabo a

de lo que
que el ar
no narcó
es acorde
so es ap
nal, dice
establece
que es
que estab
acetato de
ble el art
196 y n
sustanci
narcóticos
que sí se
mpre la m
mento leg
nico, que
ue en el pr
r los age
no hay
nriquecimi
cluso se a
fue quien
lo hizo a l

1. *...narcótico,
 2. *...operación
 3. *...contribu
 4. *...riesgo, que
 5. *...los impu
 6. *...una perso
 7. *...que tam
 8. *...excepciona********



México por la que incluso fue respaldado o fue confirmado por la cámara farmacéutica en México en una expo, que sus empresas fueron debidamente registradas en México, que está lleno de orgullo de ser mexicano, que no es un presunto criminal que está procesado y justamente y que lleva más de diecisiete años, dice que se le ha afectado sus derechos fundamentales, que no existen pruebas, que tiene una edad avanzada y su salud dice que tiene enfermedades crónicas asma, dolor de pies, dice que quizá ha sido extensiva debido a la prisión preventiva, que es absurdo el hecho que se le atribuye porque nunca ha afectado a la salud pública, que pide por razón de humanidad que se le autorice el cambio de medida cautelar incluso que su madre tiene más de ochenta años y que si bien él está consciente que no puede viajar a otro país pero bueno pide el cambio de medida cautelar a efecto de que pueda incluso poder tener comunicación con su madre aunque sea por video, incluso su padre murió en el dos mil veintidós y que no lo pudo llamar, por una parte son infundados los argumentos del señor justiciable en la presente audiencia materia de la presente audiencia no estamos analizando la probable responsabilidad del señor justiciable, la probable responsabilidad del justiciable quedó debidamente constatada con motivo del auto de formal prisión.

Incluso tuvo en los medios legales los cuales ejerció debidamente y los cuales hasta este momento de la privación ilegal de su libertad, aclara la privación de su libertad está sujeta al auto de formal prisión contrario a lo que dice la defensa y el señor justiciable no advierte que esta privación sea ilegal por el contrario se encuentra amparada por la propia constitución debido a que fue debidamente señalado como probable es realmente responsable hasta la etapa que se analiza en la comisión de los hechos que se le atribuyen, de ahí que no voy a pronunciar sobre esos tópicos que está argumentando el señor justiciable, esto es, si es o no responsable de los hechos que se le atribuyen, si la materia prima es precursor químico y no es psicotrópico ni narcótico ni tampoco si fue o no absuelto por los mismos hechos sobre ese aspecto insisto ya hay un pronunciamiento en donde sea en donde conforme a la exposición que hizo la fiscalía se me dijo que promovió un incidente de sobreseimiento del cual conforme a los argumentos que dijo resultó infundado.

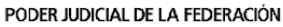
De ahí que señor justiciable esencialmente estoy declarando infundado porque a consideración del suscrito existen riesgos procesales que me vino a decir una persona que es subagente adscrito a la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso el cual a consideración del suscrito la única medida cautelar suficiente para garantizar o neutralizar dichos peligros o riesgos procesales es la prisión preventiva conforme a lo que está diciendo la fiscalía.

De ahí que el suscrito ya me pronuncié sobre la solicitud, sobre cada uno de los argumentos que hicieron los intervinientes,

telar, en
es factib
confirma
mpuesta
es expues
establece
s de lo que
o Nacional
eamientos
esa legis
ciable seg
ncuentra
fundament
la medida
ue dure e
finitiva que
solo en
ecutoria la
atorce m
se confir
inicialmen
ral de en c
ra su cor
ordenó le
67 del
forma, en
o Nacional
ta audien
dos de la
sin nece
minos de
l de Pro
si es que a
mpre y cua
e advierte
terios emi
e regulan
medida c
o de los ci

terios emi
e regulan
medida c
o de los ci

Profundado e



Reiteró que el expediente es complejo porque la causa se sigue por varios delitos (**delincuencia organizada** con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita; **contra la salud** en la modalidad de introducción al país de los psicotrópicos denominados acetato n-acetilpseudoefedrina y acetato de efedrina; **contra la salud** en la modalidad de transporte del psicotrópico denominado acetato de n-acetilpseudoefedrina; **contra la salud** en la modalidad de producción de los psicotrópicos denominados efedrina, pseudoefedrina, acetato de efedrina y n-acetilmetanfetamina; **contra la salud** en la modalidad de posesión de los psicotrópicos denominados efedrina, pseudoefedrina y clorhidrato de pseudoefedrina con fines de tráfico; **posesión de arma de fuego** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; **posesión de cartuchos para arma de fuego** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; **posesión de arma de fuego** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; **posesión de cartuchos para arma de fuego** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y **operaciones con recursos de procedencia ilícita** (en la modalidad de que conjuntamente, custodie dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento

ulo 400 b
e más de c
causas qu
08, y el d
on y de
el quejoso
gnación c
ersas.
ocesal del
e ello obed
desahogo
es de c
moniales,
debe toma
arse en c
e han re
ocesales.
a de la aut
pectos de
ue del dic
e, se susp
de Covid 1
el horario
el asunto

08, y el de
on y de

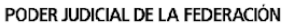
ersas.

desahogo
es de
moniales,

pectos de

e, se susp
de Covid 1
el horario
el asunto

iligencias
s partes



Lo cual se estima ajustado a los lineamientos que regulan tales aspectos.

En efecto, en el caso Wong Ho Wing vs Perú, en la sentencia de treinta de junio de dos mil quince, párrafo 210, aplicable conforme al artículo 1 constitucional, se indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un proceso, entre ellos:

- a) La pluralidad de sujetos procesales.
- b) El contexto en el que ocurrió la violación.
- c) Cantidad de recursos interpuestos en un proceso.
- d) La complejidad del asunto, entre otros.

Lo que se advierte se destacó por la responsabilidad para justificar la razonabilidad de la prisión preventiva.

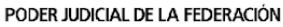
Asimismo, en cuanto a la actividad procesal del interesado, en el párrafo 211 de esa misma sentencia se indicó que ese tribunal ha considerado que la interposición de recursos constituye un factor objetivo, que no debe ser atribuido ni a la presunta víctima ni al Estado demandado sino que debe ser tomado en cuenta como un elemento objetivo al determinar si la duración del proceso excedió del plazo razonable.

55

considerar
la prisión p
de la rev
virtud de
go. En et
por la au
ese fin (an
nales), s
rior porqu
ues el q
nidos, Hor
naturalizado
opiedades
por razón
ría en el p
domicilios
no se tie
e esos lu
ese lugar
cia de mo
J, laborales
on I del

mó en co
 e ello dad
 ejoso add
 para com
 y cuatro a
 cción II de

del imputa
tro anterio



Al existir la orden de aprehensión advierte que su conducta no se ajustó al marco normativo y por tanto no es indicativo de que voluntariamente se someterá a la jurisdicción penal.

Luego, dio contestación oportunamente a los argumentos manifestados por la parte quejosa, incluso por lo antes expuesto no se pronunció sobre diversas medidas, porque declaró infundado primero el cese de la prisión preventiva y después la revisión de la medida cautelar.

Posteriormente, declaró que estimaba infundada la petición del cese de la prisión preventiva y el cambio de medida cautelar, en ese sentido, con fundamento en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales refirió que no era factible la sustitución y el cese de la prisión preventiva impuesta al aquí quejoso en virtud de las consideraciones expuestas en esa audiencia.

Por lo tanto, emitió los lineamientos y vigencia de tal medida, por lo que en términos del artículo 159, fracciones II y III, del aludido código, procedió a fijar los lineamientos y con base en lo que establece el citado precepto dispuso que la prisión preventiva del justiciable seguirá cumpliéndose en el centro donde actualmente se encuentra recluso, salvo que la autoridad administrativa bajo fundamentación y motivación considere su cambio de centro, la medida cautelar se deberá ejecutar durante todo el tiempo que dure el proceso del cual deriva el acto reclamado, hasta el dictado de la sentencia definitiva y solo en caso de que sea condenatoria hasta que cause ejecutoria la misma, de ahí lo infundado de los agravios expuestos por el impetrante de amparo.

En síntesis, este juzgado de amparo estima que el juez responsable satisfizo el test de proporcionalidad requerido para la imposición de la prisión preventiva justificada (no se soslaya el hecho que la autoridad responsable analizó la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, se advierte que generó las condiciones de la prisión preventiva justificada), pues para ello de acuerdo a los

artículos 19 Constitucional, 153 a 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe cumplir lo siguiente:

I. Verificar que en el caso concreto exista un riesgo procesal determinado por la probabilidad, basada en evidencia, de que el imputado se sustraerá de la justicia; incidirá en el desarrollo del procedimiento; o bien, afectará a la víctima, a los testigos o a la comunidad en general —sólo cuando esto último tenga repercusión en el propio proceso—.

En el caso si se cumplen pues está acreditado en evidencia el riesgo consistente en que exista peligro de sustracción, en virtud de que no acreditó el arraigo domiciliario y familiar, aunado a lo elevado de las penas que se le pudieran imponer por los delitos atribuidos y la actitud que voluntariamente adoptaría el imputado antes esto.

II. Analizar, conforme a las particularidades del asunto y atento al momento en que resuelva esa cuestión, si la concreción de la prisión preventiva es idónea para satisfacer en algún grado los enunciados fines cautelares.

En el caso, resulta **idónea** por que se satisfizo los fines cautelares para que se asegure la presencia del imputado al proceso porque se mitiga el riesgo en el peligro de sustracción.

III. Escudriñar la necesidad de la imposición de la aludida medida, en particular, a partir de descartar si alguna o algunas de las restantes que se prevén en el artículo 155 del nombrado código nacional.

Al respecto, el juez responsable de manera implícita realizó dicho ejercicio pues al seleccionar que la prisión preventiva justificada era la única medida que neutralizaba el riesgo procesal de sustracción se estima que realizó tal ejercicio descartando las demás medidas que por su naturaleza estaban dirigidas a contrarrestar ese riesgo pero que se estima no son suficientes como lo es la prisión preventiva justificada tal como lo adujo el juez responsable.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

IV. Examinar si la materialización de esa medida al asunto concreto es proporcional en sentido estricto, esto es, será ineludible que se estudie si el sacrificio inherente a la mencionada privación de la libertad no es desmedido en relación con las ventajas que se obtengan mediante la aplicación del indicado encarcelamiento previo.

En el particular, la medida de prisión preventiva justificada es **proporcional** en sentido estricto dado que la limitación del derecho a la libertad de ambulatorio no es desmedido respecto al riesgo procesal que se pretende neutralizar.

Apoya lo anterior la tesis (II Región) 10.13 P (11ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, página 5678, Undécima Época, con registro digital 2027131, de rubro y texto siguientes:

“PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. TEST DE PROPORCIONALIDAD QUE DEBE SUPERARSE PARA LA IMPOSICIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR. Hechos:

El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la sentencia respectiva, el secretario en funciones de Juez de Distrito negó la protección constitucional al considerar, en términos generales, que dicha prisión preventiva era proporcional. Inconforme, el impetrante interpuso recurso de revisión, en el cual, para analizar la legalidad de la resolución recurrida, se estimó indispensable dilucidar: ¿De qué manera debe justificarse la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva? - - - Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Control, para imponer la prisión preventiva justificada, debe superar un test de proporcionalidad, el cual se encuentra determinado por la existencia de fines legítimos a alcanzar con la imposición de esa medida cautelar, así como en función de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la concreción de dicho encarcelamiento preventivo. - - - Justificación: De los artículos 19, párrafos primero y segundo, de la Constitución General de la República; 153, 155, 156, 157 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de lo resuelto por la

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

d) Respecto del riesgo para la víctima u ofendido, toda vez que en el asunto del que deriva el acto reclamado no existen, no realizó mayor pronunciamiento lo cual resultó correcto, pero el juez estableció que ante el elevado riesgo de fuga era innecesario analizar los otros tópicos expuestos por la fiscalía relativos al riesgo de obstaculización del proceso y el riesgo para las víctimas, ya que su análisis no variaría el sentido de su determinación, al ser la prisión preventiva la única medida cautelar que permite neutralizar el riesgo de sustracción, circunstancia que comparte este órgano de control constitucional, de ahí que la jueza no consideró el elemento de riesgo para la víctima para fundar su decisión, por lo cual el análisis de su motivo de inconformidad ningún beneficio le reportaría.

e) No existe dato de prueba que acredite que el imputado antes de su detención o posterior a ella haya mostrado alguna conducta ilícita.

Argumento que resulta **inoperante**, toda vez que al existir una orden de aprehensión del fuero común se advierte que su conducta no se ajustó al marco normativo, por tanto, no es indicativo de que voluntariamente se sometería a la prosecución penal.

f) El fiscal no acreditó la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar de prisión preventiva.

Argumento que resulta **infundado** pues se advierte que la fiscalía cumplió con la carga procesal de demostrar y justificar por qué la prisión preventiva era la medida cautelar suficiente para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, pues aportó los datos de prueba necesarios; asimismo, expuso los argumentos objetivos que permitieron al juez responsable determinar que dicha medida era idónea, proporcional o necesaria.

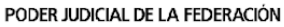
Lo anterior, pues en cuanto al riesgo de sustracción el fiscal señaló que existían riesgos significativos que afectaban la

evidencia
tos de pru

que no ha
lio con su
raleza de

posesión

medida no
cificament



En este contexto, es que no se advierte que se trasgredan los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos **Tzompaxtle Tecpile** y otros contra México y el diverso **García Rodríguez** y otro, también contra México, pues en dichos precedentes se analizó la prisión preventiva oficiosa determinando su incompatibilidad con diversos derechos humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero en el caso se revocó esa medida cautelar oficiosa y de acuerdo a los parámetros de necesidad, idoneidad y proporcionalidad se impuso la diversa de prisión preventiva justificada.

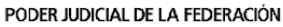
g) Violación a los principios de presunción de inocencia y pro persona, pues no se realizó a su favor un control de convencionalidad, con los actuales criterios de la Corte Interamericana.

63

cto de la
tal circuns
nal, dejan
y legales
o, acceso
ones que
se provo
de tal funci

14 (10a.), vis
ce, del Tomo I
6485, que d
**A PERSONA
NALES NAC
ERSOS PRIM**
Si bien la re
ial de la Fede
o en relación
orable a la pe
implica que
acultades de i
ada reforma,
onales existe
ica analizada,
ón jurisdiccio
gualdad, igualc

e la Primera
el Libro XXV,
eta, Décima É
DE ÉSTE NO
S POR LO
SIONES. Esta
ncia 1a./J. 10
a, Décima Épo
PRO PERSON
L APLICABLE
al, modificad
entales, public
ento jurídico m
medulares: a)
ados Unidos l
ernacionales c
que los valor



Además, en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que si bien dispone que las medidas cautelares que restringen la libertad personal deben ser excepcionales y no ordinarias, rutinarias o sistemáticas; también lo es que deben ser justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad, lo que en el caso así aconteció, aunado a que como lo estableciera la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia.

En relación con lo anterior, se invoca la tesis aislada número CXXXV/2012, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 493, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001432, que a la letra dice:

“PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada”.

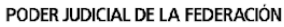
Aunado a que como se indicó el juez responsable sí observó los parámetros de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la imposición de la prisión preventiva justificada, como se ilustró en párrafos precedentes.

Asimismo, no son de beneficio para su pretensión las tesis de la Corte Nacional que invoca el quejoso de rubros: **“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE (...);”**; **“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD (...)”** y **“PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBE ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL (...),”** pues como se explicó la actuación del juez se sujetó a dichos lineamientos.

También, resulta **infundado** el agravio mencionado en el numeral **3.2**, relativo al control de convencionalidad que armoniza las normas internas e internacionales, incluso, invocó entre otras la tesis aislada con registro 2001430, la cual es anterior a los criterios invocados en esta determinación, los que son criterios jurisprudenciales.

En el entendido que el control de convencionalidad es la obligación de los Estados de interpretar y aplicar su derecho interno de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, el Alto Tribunal Nacional ha precisado que no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor



grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.²

Relativo a la temática que se analiza, este órgano no inobserva que ha existido una evolución jurisprudencial en materia de las denominadas restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades y, que uno de los precedentes al respecto es el Amparo Directo en Revisión **583/2015**, en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la existencia de tales restricciones no impiden una interpretación armónica, sustentada en el principio pro persona (que implica atender a lo más favorable para el gobernado). Sin embargo, del análisis del propio criterio que se aprobó con motivo de la resolución de ese asunto – y otros cuatro–, se establecieron dos limitaciones para llevar a cabo esa tarea:

a) Ese ejercicio quedó reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que encuentra sustento en la razón

² En este sentido, es de citarse la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página ocho, Libro 13, diciembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, con registro digital: 2008148, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: **“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.** La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.”.

la última
a posible a

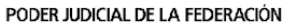
er la restri

calidad en
 sin conte
 er sido mo

vigentes y
ia de la

precisar que
serie de d
lle, no riñ

de conside
la refor
miento de



constitucional que prevé no le son aplicables a sí misma por un principio de coherencia, como acertadamente lo indicó el juez responsable.

Además, ello se estableció en el criterio **P. VIII/2015** del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (no de Tribunal Colegiado), **incluso** señalando que las reformas constitucionales pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos en el pasado por disposición expresa del órgano reformador y por interpretación.

Y, en el caso, conforme al artículo transitorio primero de ese decreto de reforma se determinó que entraría en vigor el uno de enero de dos mil veinticinco y ello no puede tampoco interpretarse pues el acto reclamado se emitió con anterioridad a la aludida reforma, empero como se vio en párrafos anteriores la autoridad responsable emitió conforme a derecho su determinación, incluso la tesis aislada con registro 2001430 que invocó la parte quejosa es de la décima época, anterior a los criterios expuestos con anterioridad, los cuales además son jurisprudencias.

De ahí que tampoco asiste la razón al quejoso, toda vez que la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado tomó en consideración lo expuesto por las partes, fundamentando y motivando su determinación, con las leyes y criterios jurisprudenciales aplicables ya referidas.

Referente del agravio citado en el numeral **3.3**, también es **infundado**, en virtud a que la autoridad responsable respecto el derecho a la tutela judicial efectiva, como se advierte de las diversas transcripciones efectuadas en párrafos precedentes se garantizó al quejoso el acceso a la justicia para defender sus derechos e intereses legítimos, sin que se advierta que se le haya dejado en estado de indefensión alguna, fue escuchado en la audiencia, la resolución emitida fue dictada por la autoridad responsable de manera pronta, completa, imparcial y conforme a derecho.

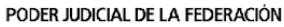
Consideraci
embargo
lamado, c

10

de suscritos
factores de
ar esos fa
bién a pre
o 168 frac
o de sustr
quí debo d
 máximo o s
considera
go, aquí n
e el artícu
de sustrac
do en cues
la fracción
tracción q

do tomar t
oner, debo
el señor.
e presunc
como bier
ue de mar
ta este m
este mom
cción II, to
único qu

ón la pen
e advierte
go Nacion
ipal factor
realizó, si
eligio de



realizadas con anterioridad refirió que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad en cualquiera de los casos que prevé la constitución desde la detención con motivos de los hechos hasta la sentencia de primera instancia o hasta que cause ejecutoria o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva la situación jurídica del gobernado.

Por todo lo anterior, analizado que fue el acto reclamado, se reitera que se advierte que el mismo se encuentra ajustado a derecho, pues cumple cabalmente con los requisitos que prevén los preceptos procesales y constitucionales que rigen para el dictado de una resolución de esa índole, razón por la cual, se considera que son correctos los fundamentos y motivos que en ella se invocan.

En esas condiciones, lo procedente es **negar el amparo y protección de la Justicia Federal.**

NOVENO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y XI , de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprimanse los datos sensibles que contenga la presente resolución.

Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente:

“DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos”.

DÉCIMO. Publicidad de la sentencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil veinte, intégrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de esta sentencia, así como todos los datos de registro que se requieran para garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.



Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RESUELVE:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** ** **, contra el **Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en esta ciudad** y por el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos destacados en el diverso octavo de este fallo.

Notifíquese en términos de ley.

Así lo resolvió y firma **Daniel Marcelino Niño Jiménez**, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, hasta el día de hoy catorce de noviembre de dos mil veinticinco, que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa con Jorge Donaciano Torres, secretario que da fe.

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

133338628_5851000036765487008.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE DONACIANO TORRES	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.1d.eb	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/11/25 04:51:08 - 14/11/25 22:51:08	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	9f a8 5a 88 aa b0 54 a5 e9 94 2f 4b 1a ee ed 43 2e 6e 86 d2 08 54 01 e9 e6 31 7d 2e 9f f1 0d 63 c2 15 d9 4f 24 e9 7f 4a cc b1 a1 4a 0c af 96 32 17 68 2e 55 0a 7c 5d 6c 34 40 00 39 f0 25 9c 46 f1 03 3b 3b 7d 5b a8 fe bc c8 9f 59 19 40 1b 4d 37 ff 4f dc d9 72 85 e4 ba f4 f2 4f 09 d0 3c 74 ae e7 40 ca c4 2c 40 16 4d 90 97 c0 9a 62 fe 16 c2 71 b2 30 0f eb 2f 25 c3 90 af 4b 88 75 8e 1f a8 15 3e 95 81 37 48 62 4f 63 60 40 2f a5 cc ed e8 ab 23 11 3a a8 65 5f 19 0a 10 ca 7d 6f e5 bd 61 ef 59 5c 4d b8 4a 59 ae b1 8f 10 b6 fe bb 4c 08 17 6e 8a 22 59 a1 ba f5 26 8e b5 00 01 2c ca 89 d8 bb 1f 57 6b a9 15 b9 d9 cf e0 a5 1a ce 6d bf d6 27 77 71 76 6c 2e 16 da 6f cc a9 58 07 9b 49 fb 5e 44 8e 69 40 db 8d db 9f cc 19 4a ba f1 fa c4 75 ed 41 59 4f 60 dc ac 36 e6 b7 56 4c ec			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/11/25 04:51:08 - 14/11/25 22:51:08			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.1d.eb			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/11/25 04:51:08 - 14/11/25 22:51:08			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	81798747			
Datos estampillados:	PYlx9qAxDrNPSLOCofLwgABi2iM=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Daniel Marcelino Niño Jiménez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2f.7b	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/11/25 04:56:07 - 14/11/25 22:56:07	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	40 22 48 1d fa 53 80 4f c1 9d 71 c4 b7 82 41 08 be f0 76 b7 f1 ca 05 f2 4b 91 37 5a ea b5 fa 6e 15 30 e5 7e 25 b6 ba 1d c5 a4 e7 d4 45 50 1f 62 bd aa 3d ca cd 89 df 82 04 c7 6f a9 eb 26 4e c5 93 10 9c 99 4b 62 61 7e da 28 42 34 9f 28 4b c9 61 99 c2 a0 df 39 11 1b c4 e2 92 8e c8 4e ab 52 04 8a 9e 67 1c 09 f0 25 a8 5d b6 11 38 38 03 3a 3d d4 0a 4c a6 75 2a ee f5 d8 1e 3c 51 91 14 41 4b 10 7d e8 cf 8d 4e bd 9d 64 da e8 cb 4d 70 24 cc cc 97 37 71 9d 79 cc 9f 00 70 43 91 5f c6 23 43 73 8b 75 53 9b 04 d0 75 f4 a6 8a d9 93 b7 96 76 53 d0 f6 14 56 7c 18 f6 bd 84 64 69 12 6a 92 cb d8 35 47 86 1c cf 9a a3 34 24 f8 4d bb 71 b1 87 0c 19 16 08 05 01 4e d0 de a6 9f 88 fe 89 06 59 7b 14 60 9e 00 b4 ab 17 48 9e cc 35 3b 95 56 f6 9e 9e b3 30 61 b1 a2 e4 d4 41 3f 05 a7 1e 8e			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/11/25 04:56:07 - 14/11/25 22:56:07			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2f.7b			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	15/11/25 04:56:08 - 14/11/25 22:56:08			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	81799300			
Datos estampillados:	HZpq0KMxbFPKyhsAy/6cDNWkQXE=			

El catorce de noviembre de dos mil veinticinco, el licenciado Jorge Donaciano Torres, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.